

Nuevo

Revista

FORO AUTÓNOMO

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas

Volumen 2 - Número 1 • enero - junio de 2021
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

ISSN: 2711- 4856 (en línea)
<https://nfa.uniautonomia.edu.co>



Volumen 2 - Número 1 • enero - junio de 2021 • ISSN: 2711-4856 (en línea)

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas

Sello Editorial Uniautónoma del Cauca

Popayán (Cauca – Colombia)

Correo electrónico: revistaforoautonomo@uniautonomo.edu.co

Website: <https://nfa.uniautonomo.edu.co>



Diagramación: Sello Editorial Uniautónoma del Cauca

Ilustración de portada: Ademir Campo Gutiérrez

Comité Científico

Dra. Lyda Teresa Córdoba Hoyos

Universidad del Valle

Dr. Luis Eduardo Ruano Ibarra

Universidad Cooperativa de Colombia

Dr. Ramsés López Santamaría

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

Dr. Gildardo Vanegas Muñoz

Universidad del Cauca

Comité Editorial Central

Dr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval

Rector Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

Dr. Juan Pablo Sterling Casas

Director Revista Nuevo Foro Autónomo

Decano Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas

Mg. William Darío Chará Ordóñez

Editor Revista Nuevo Foro Autónomo



Ese es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de Creative Commons 3.0 la cual permite su uso, distribución y reproducción de forma libre siempre y cuando el o los autores reciban el respectivo crédito.

Contenido

Artículos resultado de investigación

Participación de la mujer en posiciones directivas: estudio exploratorio en empresas colombianas	5
<i>Merlin Patricia Grueso Hinestroza</i>	
<i>Mónica López-Santamaría</i>	
<i>Julián Andrés Maya Mejía</i>	
<i>Concha Antón Rubio</i>	
La equidad de género y la paz territorial en Colombia	28
<i>María Andrea Palta Limas</i>	
<i>Juliana Rodríguez Arango</i>	
Impactos, actores y dimensiones de tres coyunturas de violencia en Cali	47
<i>Ana María Betancourt Ledezma</i>	
Sistema de Atención Psicosocial en la Ley 387 de 1997 y la reforma de la Ley 1448 de 2011 en el marco del conflicto armado en Colombia	61
<i>Camila Tierradentro Macías</i>	
<i>Lida Johanna Cruz Ospina</i>	
Política social y participación comunitaria en América Latina: algunas consideraciones sobre la implementación	75
<i>Alexander Castillo Garcés</i>	

Artículo de reflexión

Enseñanza del Derecho y Resultados de Aprendizaje: prolegómenos a una propuesta desde las capacidades humanas, la solidaridad y la empatía	91
<i>Yohana Cárdenas Contreras</i>	
<i>Juan Pablo Sterling Casas</i>	

La Equidad de Género y la Paz Territorial en Colombia

Gender equity and territorial peace in Colombia

María Andrea Palta Limas*

Universidad del Cauca

correo electrónico: andreapalta@unicauca.edu.co

Juliana Rodríguez Arango**

Universidad del Cauca

correo electrónico: rjuliana@unicauca.edu.co

Recibido: 12/04/2021 • Revisado: 23/04/2021 • Aceptado: 31/05/2021

DOI: <https://doi.org/10.46571/NFA.2021.2.1.2>

Cómo citar: Palta, M., y Rodríguez, J. (2021). La Equidad de Género y la Paz Territorial en Colombia. *Revista Nuevo Foro Autónomo*, 2 (1), pp. 29-46. DOI: <https://doi.org/10.46571/NFA.2021.2.1.2>

Resumen

La violencia contra la mujer es una problemática que se encuentra inmiscuida en la sociedad la cual se ha venido naturalizando, sometiendo a las mujeres al establecimiento de relaciones inequitativas entre hombres y mujeres, desde ámbitos familiares y laborales, hasta ámbitos sociales, por lo tanto, los Estados han recurrido a elaborar acciones institucionales que mitiguen este fenómeno, en este caso, Colombia ha implementado la política pública de Equidad de género. Este artículo establece la evaluación de la misma, partiendo de un marco referencial normativo y conceptual utilizando una metodología de carácter mixto. Se hace énfasis en el establecimiento de la paz territorial como eje transversal de la equidad de género mediante la evaluación de productos de la política pública para la equidad de género en Colombia, concluyendo que la falta de capacidad estatal ha ahondado en la precaria implementación de la política y el constante aumento de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres en ámbitos familiares y sociales, llevados a cabo en zonas urbanas y zonas rurales, sin dejar atrás el fenómeno del conflicto armado que se vive en el país desde mediados del siglo XX.

Palabras clave: Mujeres; enfoque de género; feminicidio; política pública de género; violencia; Paz territorial

Abstract

Violence committed against women is a problem that has been naturalized or normalized among society; women have been subjected to unequal relationships either in her couple, her family, work environments, or social areas. Hence, states have developed institutional actions that attenuates this phenomenon, we are going to focus in the colombian case, where gender equity policy have been implemented. In this study we are going to evaluate colombia's policy concerning to the problem, starting from a normative and conceptual framework references to implement mixed methods of research. Special emphasis have been implemented in the territorial peace as a cross cutting axis of gender equality and the policy products evaluation per se. Concluding, that the lack of state capacity has increased the precarious implementation of the policy as the constant escalation of the different types of violence against women in family and social spheres; taking place in rural and urban areas, parallel to the development of the Colombian armed conflict that has been going on since mid-twentieth century.

Keywords: Women; gender approach; femicide; gender public politics; violence; territorial peace

Este artículo de investigación es producto del proyecto de investigación denominado «Construcción de Paz y tramitación de conflicto en el departamento del Cauca 2018: una mirada territorial y con enfoque diferencial» adscrito a Grupo de Investigación GIAPRIP de la Universidad del Cauca.

**Investigadora del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca (Colombia). Investigadora del Semillero LVMEN adscrito al Grupo de Investigación en Actores, Procesos e Instituciones Políticas GIAPRIP del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9001-5913>

*Investigadora del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca (Colombia). Investigadora del Semillero LVMEN adscrito al Grupo de Investigación en Actores, Procesos e Instituciones Políticas GIAPRIP del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6644-3205>

Introducción

La violencia contra la mujer, es una problemática que se encuentra inmiscuida en la sociedad a lo largo del tiempo, la cual se ha venido naturalizando, estas han estado sometidas debido al establecimiento de relaciones inequitativas entre hombres y mujeres, desde ámbitos familiares y laborales, hasta ámbitos sociales, es por ello que este tipo de violencia se ha convertido en un tema cotidiano a nivel mundial, nacional y local, es de esta manera que se han formado diversas acciones para promover el apoyo y protección hacia las mismas a lo largo del territorio colombiano.

Es por ello que se establece de carácter internacional que todos los Estados deben ser garantes de derechos de las mujeres, encargándose de la promoción, defensa y protección de las mismas (CIDH, 2018), sin embargo, en Colombia las mujeres han estado buscando reconocimiento y posicionamiento, de tal modo que se ha logrado un marco normativo, con la formulación de legislación lo cual se ha convertido en logros significativos para ellas en la sociedad. En 1979, las Naciones Unidas aprobó la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de esta manera se obliga a los Estados a tomar medidas y acciones pertinentes para que se garantice la igualdad entre hombres y mujeres (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979).

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el 18 de diciembre de 1979 que entra en rigor a partir de 1981, gracias a la ratificación de 20 países, en su décimo aniversario de la convención alrededor de 100 naciones creen obligatorias las consideraciones de la asamblea, en todo este proceso se van adicionando países. En el caso colombiano hacia el año 1999 se firma el protocolo y en 2007 se hace la ratificación del mismo, siendo uno de los últimos en la región del caribe (Observatorio de Asuntos de Género, 2011).

Para el 2008, se promulga la Ley 1257, donde se garantiza la protección de la mujer por su condición de género, a partir de ello se pretende; sensibilizar, prevenir, sancionar las diversas formas de violencia y discriminación contra ellas, definiendo la violencia contra la mujer y la concepción de daño (Ley 1257 de 2008). De esta manera, Colombia pone énfasis en la problemática que se vivía desde mucho tiempo atrás, sin embargo, no tenía en cuenta que algunos casos de violencia, terminaban en asesinatos por el hecho de ser mujer, lo que se denomina como feminicidio.

Hacia el año 2012 el caso de Rosa Elvira Cely despertó las alarmas a nivel nacional, pues su asesinato se catalogó como feminicidio, siendo este un detonante para ajustar la normatividad anteriormente mencionada y decretando así la Ley 1761 de 2015 con el propósito de tipificar el feminicidio como delito autónomo, penalizar y prevenir la ocurrencia de este tipo de hechos, con el fin de abordar el feminicidio como un delito para prevenir las agresiones tanto físicas como psicológicas contra la mujer, y, por ende, eliminar estas prácticas dentro de la sociedad colombiana, adoptando por medio de esta Ley estrategias de sensibilización con el propósito de garantizar el desarrollo y la integridad de la mujer desde los principios de igualdad para con todos y todas.

En este sentido, el Estado colombiano ha optado por el diseño de la política pública de equidad de género que propone garantizar una vida libre de violencias a través del diseño de acciones sostenibles para la transformación cultural contribuyendo esto al goce efectivo de los derechos de las mujeres en Colombia, por medio de la construcción de paz, transformación cultural, autonomía económica, participación en los escenarios de poder, toma de decisiones, salud, derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, el enfoque territorial y el enfoque de género confluyen con el objetivo de proporcionar espacios que desarrollen las lógicas del goce efectivo de los derechos de las mujeres y defensa de los mismos, teniendo en claro que no existe en Colombia un panorama que permita potencializar la transformación cultural a partir de identidades, el desarrollo inclusivo y sostenible.

Metodología

El diseño metodológico de este artículo se construyó a partir de dos estrategias de investigación, una cualitativa y otra cuantitativa. De carácter cualitativo, se acudió al análisis documental a partir de la revisión de la normatividad existente en materia de género y la política pública diseñada para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, transversalizada por el enfoque de paz en el territorio colombiano. La sistematización y procesamiento de la información permitió identificar el objeto, el alcance y sus objetivos. Con la prensa, se construyó una base de datos desde la revisión del diario El Tiempo entre los años 2002 y 2018 con la cual se pudo realizar un seguimiento a los contextos de implementación de la Política Pública de Equidad de Género.

De carácter cuantitativo, se procedió a la recolección de datos agregados suministrados por el Observatorio de Género de América Latina y del Caribe, que incluyó la revisión de datos sobre violencia intrafamiliar, feminicidios y violencias a partir de anuarios del Instituto Colombiano de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó SPSS a partir de la selección de variables como: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar - menores de edad, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar - mayores de edad, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en casco urbano, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en casco rural, feminicidios perpetrados con arma de fuego, feminicidios perpetrados con arma cortopunzante y mujeres víctimas de violencia física con lesión contundente.

Resultados

La paz y el enfoque de género, una mirada transversal

Las mujeres en Colombia a lo largo del tiempo, se han visto afectadas por los diferentes tipos de violencia, ya sea en el ámbito familiar o social, a causa del conflicto armado o por el hecho de ser mujer, esta problemática se ha instaurado en la agenda pública desde el siglo XX, sin embargo, no había cobrado relevancia en Colombia. En este sentido, se encuentra que los diferentes tipos de violencias en contra de las mujeres no solamente se encuentra como una

problemática que aqueja a la ciudadanía colombiana, sino que se instaura como un problema social a nivel mundial.

Por otra parte, Colombia se ha caracterizado por tener un débil avance con relación a las acciones de protección y sensibilización respecto a la violencia contra las mujeres y por ello, estas sufren además de los casos de violencia, comportamientos de exclusión educativa, laboral y como parte de ello la baja participación política. Esta última convirtiéndose en un elemento fundamental, debido a que existe exclusión de la representación femenina en la estructura del poder político debido a la existencia de círculos excluyentes de poder, implicado así una subrepresentación de las mujeres en los cargos públicos en todos los ámbitos de gobierno (CIDH, 2011).

Así entonces, el Acuerdo de Paz establece la importancia de ampliar y mejorar la democracia para poder construir paz en Colombia, esto mediante el surgimiento de otras fuerzas distintas a las tradicionales al escenario político, lo que permite un mayor y mejor debate de las problemáticas del país, así como “fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.” (ONU Mujeres, 2017, p. 2), es decir en el acuerdo se busca tomar en consideración la forma diferenciada en que la mujer tiene barreras de acceso a nivel social como institucional.

El enfoque de género busca transformar las relaciones de poder desiguales, trato igualitario, reconocimiento y distribución del trabajo del cuidado y reconocer el impacto diferenciado entre las personas. Lo anterior se encuentra en el Acuerdo de paz, apostándole a la inclusión como principio de actuación social, política y democrática, encaminado al reconocimiento de la igualdad de derechos, en especial de las mujeres independiente del ciclo vital, estado civil, y relaciones familiar-comunitaria, como sujetas de derechos y de protección constitucional” (ONU Mujeres, 2017, p. 3), en este sentido se encuentra que en el acuerdo se incorpora la perspectiva de género mediante 17 estrategias para generar mayores oportunidades dentro del ámbito político y social (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Medidas que incorporan la perspectiva de género

Medidas que incorporan la perspectiva de género		
Incorporación de medidas especiales para que las mujeres participen en el sector público	Garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensoras de derechos humanos	Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y potenciación de su protagonismo al interior de las organizaciones
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales	Participación de las mujeres en el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y en los Consejos territoriales	Participación efectiva de las mujeres en os mecanismos de control y veeduría ciudadana
Promoción de la participación de las mujeres en los Consejos Territoriales	Fortalecimiento y promoción de la construcción de presupuestos locales participativos sensibles al género y a los derechos de las mujeres	Promoción de campañas de capacitación, pedagogía y divulgación, que estimulen la participación electoral de las mujeres, poblaciones vulnerables y territorios afectados por el conflicto
Campaña nacional de cedulación masiva, previendo medidas para que puedan participar en ella las mujeres rurales, las de las zonas marginadas y aquellas más afectadas por el conflicto	Promover un ejercicio ampliamente participativo y con perspectiva de género para identificar los obstáculos que enfrentan las poblaciones vulnerables para estimar y facilitar la participación	Incorporación de las dificultades específicas de las mujeres en el informe de la Misión Electoral para la reforma del régimen y de la organización electoral
Programa para la promoción de la participación de la mujer en política, dentro de las medidas para promover una cultura democrática y participativa	Campañas comunicativas y capacitaciones dirigidas a mujeres para la promoción de los valores democráticos, la participación política y sus mecanismos	Promoción de la participación política y ciudadana de la mujer
Promoción de una cultura democrática de paz y reconciliación y de valores no discriminatorios y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, en los contenidos del canal institucional de televisión orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas		

Fuente: ONU Mujeres 2017, elaboración propia.

Estas medidas son un indicador de la inclusión de las mujeres en la agenda gubernamental, pero esta vez no en calidad de pactadas en el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC EP sino como ciudadanas pactantes ya que según investigaciones los obstáculos presentados a las mujeres y el cierre a los espacios de negociación han sido constantes, pues según el diario El Espectador (2017) “De los 61 acuerdos firmados en medio de negociaciones entre representantes del Gobierno y de los grupos armados, desde 1982 hasta el presente, tan solo el 4% de las personas signatarias han sido mujeres”. Con lo anterior se evidencia que las mujeres no viven sus derechos políticos en condiciones de igualdad, demostrando sus mayores limitaciones en el derecho a ser electas y a participar en los procesos de toma de decisiones en las estructuras de poder de la vida política y pública nacional y en lograr que sus intereses y necesidades tengan presencia en las decisiones públicas (Torres, 2010).

En este sentido, se encuentra entonces que la política pública de equidad de género se relaciona fuertemente con las líneas de paz anteriormente mencionadas, ya que propone garantizar una vida libre de violencias a través del diseño de estrategias inclusivas, que esten acordes al contexto de cada territorio con el fin de avanzar en la transformación cultural contribuyendo esto al goce efectivo de los derechos de las mujeres en Colombia para construir una paz estable y duradera.

Mediante la implementación de esta política se busca mitigar la discriminación y garantizar los derechos fundamentales a las mujeres, construyendo así una sociedad más justa, equitativa, incluyente y en paz (Presidencia de la República, 2013). La Alta Consejería Presidencial para la Equidad realizó los lineamientos de la política, con el fin de que haya una elaboración de forma participativa en los diferentes sectores sociales que integran las mujeres en Colombia, los ejes propuestos se evidencian en la Tabla 2.

Tabla 2. Lineamientos de la política pública

Medidas que incorporan la perspectiva de género
Construcción de la paz y la transformación cultural
Garantizar la autonomía económica de las mujeres y potenciar la conciliación de la vida laboral y doméstica
Participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones
Enfoque diferencial de derechos de la salud
Enfoque diferencial de los derechos de la educación
Desarrollo de un plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

Fuente: Presidencia de la República, elaboración propia.

En este orden de ideas, la intervención nacional de la política pública de equidad de género tiene como fin la eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer, articulándose con el análisis de estrategias implementadas en concordancia con la construcción de paz en todo el territorio, para así solventar las distintas necesidades de la mujer y propiciar las condiciones adecuadas para que esta tenga una mayor inmersión en la sociedad.

Mujeres víctimas de violencia en Colombia

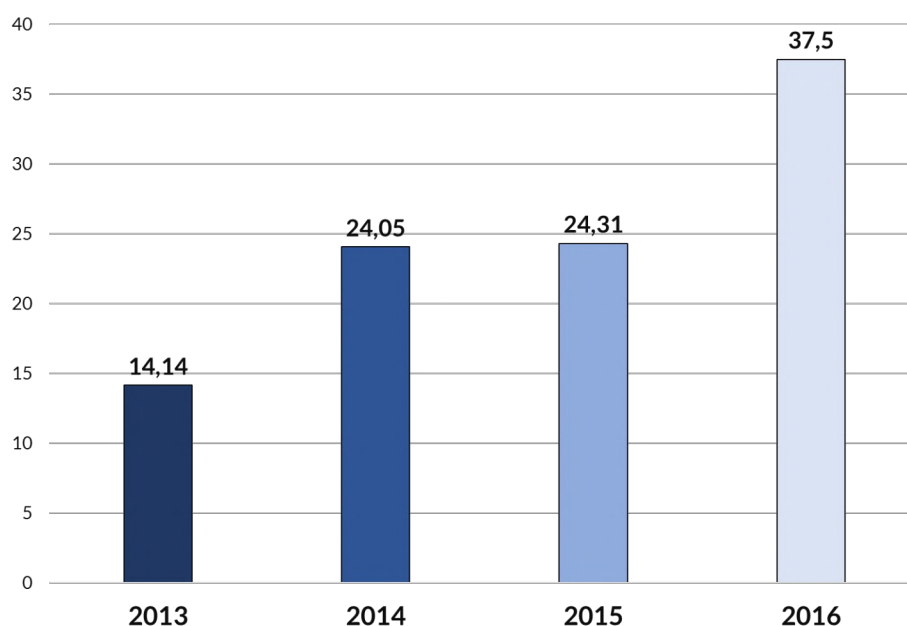
Resulta necesario abordar la violencia contra la mujer desde una perspectiva integral donde se evalúen diferentes factores haciendo referencia principalmente a los componentes que se deben desarrollar en función de la construcción de paz en todo el territorio colombiano, donde se logre identificar en qué escenarios son más recurrentes este tipo de agresiones, para ello más adelante se analizarán las cifras de violencia intrafamiliar y los contextos en las que estas se desarrollan.

De esta manera, es necesario hacer una aclaración acerca de los factores a los cuales se hace referencia ya que son los que condicionan y ayudan a tipificar las formas de violencia y agresión hacia las mujeres, donde se ven inmiscuidas las condiciones de tipo económico, académico, cultural, psicológico y el contexto en que esta se desarrolle ya que cada territorio presenta unas particularidades, lo que condicionan las dinámicas que se desarrollan al interior de estos, determinando así el tipo de la agresión, siendo categorizadas según el tiempo en que tardan en sanar. Al respecto, se hace referencia a:

Levisima (empujones, pellizcos, cachetadas etc.), leve (fracturas, golpes con objetos, heridas con arma blanca etc.), moderada (lesiones que dejan alguna cicatriz permanente y que ocasionan discapacidad temporal), grave (que ponen en peligro la vida y dejan lesiones permanentes, muchas veces en órganos internos), extrema (que ocasionan la muerte. (Torres, 2004, p. 81)

Así mismo, las mujeres que son víctimas de violencia en su gran mayoría se concentran en la categoría de violencia intrafamiliar, como se mencionó anteriormente las acciones violentas se tipifican y muchas de ellas corresponden al contexto en el que se encuentran, respondiendo a las lógicas territoriales que están transversalizadas en cierta medida por el conflicto armado interno, que ha llevado a aumentar los índices de violencia y a que las mujeres se organicen para adelantar dinámicas en las que ellas se vinculen en procesos decisorios como lo fue en los acuerdos de paz. En este orden de ideas, las mujeres de la zona rural presentan un aumento en las cifras que corresponde en la violencia al interior de la familia, siendo más notable esta problemática en las zonas rurales (Ver Gráfica 1).

En zonas rurales, la violencia intrafamiliar para el año 2016 fue de 37,50%, a diferencia del 2013 que se considera como el año con menor porcentaje de mujeres violentadas 14,14%. Se logra evidenciar un aumento significativo al pasar los años, pero las cifras aumentan significativamente a partir del 2016, lo cual responde a factores de tipo cultural, ya que las mujeres estaban presentando condiciones de sub-registro. La CIDH afirma que el acceso a la justicia debería ser idónea y efectiva, asimismo obliga a todos los Estados a proveer recursos judiciales efectivos en calidad de respuesta (CIDH, 2018).

Gráfica 1. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en casco rural

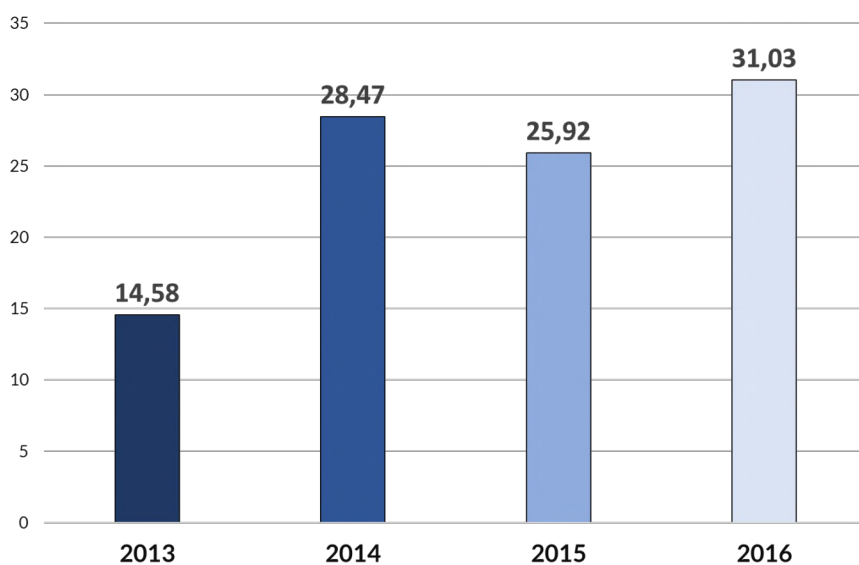
Fuente: Medicina Legal, 2013-2016. Elaboración propia.

Una de las condiciones por las cuales el índice en las zonas rurales es alto corresponde a factores de seguridad, ya que muchos de los casos son más comunes al interior de zonas de conflicto, son múltiples las mujeres que pasan por estas situaciones, así como es relatado en el diario El Tiempo (2016), “a Claudia le tocó vivir dos tipos de violencia: la armada y la intrafamiliar, pero le preocupó más la primera. Ella, su esposo y sus dos niñas fueron desplazados de la vereda Pavarandó, Mutará (Urabá), en época de combates entre paramilitares y guerrilleros de las FARC” (El Tiempo, 2016).

En concordancia con lo anterior, el caso de Claudia, es el caso de miles de mujeres en Colombia, que son víctimas tanto del conflicto armados, como de violencia al interior de la familia. Sin embargo, se debe notar que las mujeres, tienen un rol sumamente importante en el momento en que ellas se convierten en reconstructoras del tejido social, lo cual esta relacionando más con un sentido de maternidad que lleva a que sea algo de tipo biológico el desempeñar actividades que promuevan las acciones de paz desde los hogares que se convierte en un componente importante para adelantar procesos de construcción de paz en los territorios.

Por otra parte, las mujeres ubicadas en la zona urbana tienen un menor porcentaje de casos de violencia intrafamiliar que la zona rural, pero con ello no dejan de ser alarmantes las cifras, presentando un aumento progresivo y del año 2013 al 2016 las cifras tienden a duplicarse, esto se evidencia en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el casco urbano



Fuente: Medicina Legal, 2013-2016. Elaboración propia de autoras.

Se evidencia que el año 2016 posee el 31,03% de violencia intrafamiliar, configurándose como el año con mayor índice de registro de acciones de violencia y el año con el Porcentaje más bajo es el 2013. El aumento de las cifras responde a ciertos factores de naturalización de la violencia en contra de las mujeres ya que es cada vez más común encontrar noticias en donde las mujeres se vean violentadas en espacios públicos, reflejando así el deterioro de las relaciones sociales y familiares.

En este sentido se encuentra que las mujeres que han sido víctimas de los diferentes tipos de violencias, pueden llegar a sufrir del fenómeno del feminicidio. Este ha sido una problemática que se ha vivido a nivel nacional e internacional, este término parte de la teoría sobre el feminicidio, de acuerdo con sus creadoras Diana Russell y Jill Radford, que desde hace casi 20 años han venido trabajando el tema, y han propuesto esta mirada específica que tiene una particularidad: “ubican los homicidios contra niñas y mujeres como parte de la violencia de género, ese es su aporte, ésa es la pequeña y gran diferencia paradigmática y epistemológica” (Lagarde, 2006, p. 218).

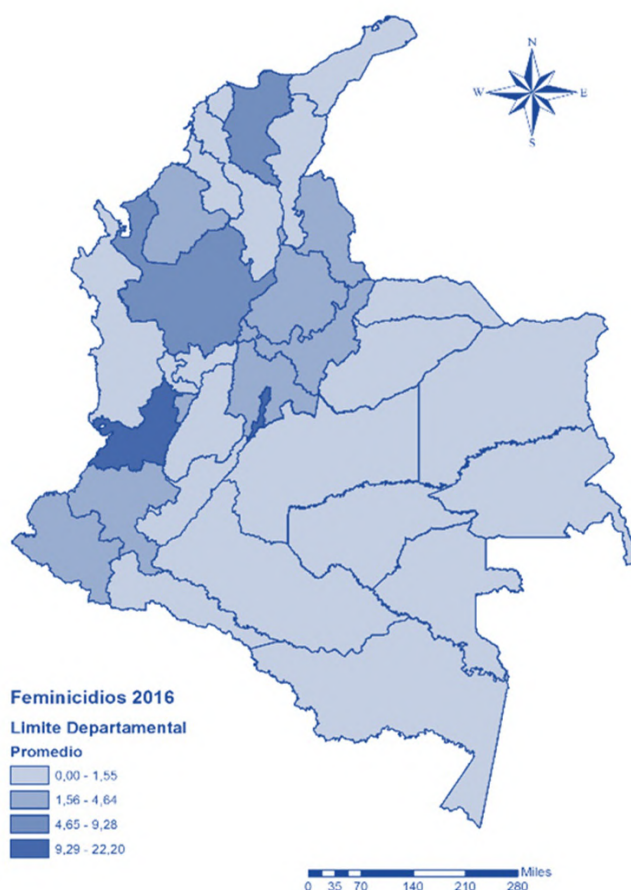
Colombia a lo largo del tiempo ha tenido constantes casos de feminicidio, aunque desde hace muy poco se está hablando de ello, ya que la violencia hacia mujeres no había cobrado relevancia y mucho menos los casos de feminicidio, dado a que el término no era conocido, además que las mujeres o las personas cercanas a estas no lo denunciaban. Es importante señalar que para Colombia resulta difícil determinar cuál es la situación real del feminicidio, pues una de las mayores dificultades que se presentan es la falta de información en el subregistro y el mal registro de los datos, así como la confusión en los conceptos de homicidio de mujeres en general y feminicidio como asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer (Huertas & Jimenez, 2016).

Así entonces, se considera que este término tenía una relevancia nula en el país y es por ello que hacia el año 2015 el feminicidio en Colombia se reconoció como delito autónomo,

con el fin de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. A pesar de que se efectúa dicha Ley a esta problemática no se le brindan las soluciones adecuadas para terminar con dicho fenómeno, pues si bien, existe la Ley, no se encuentran cifras ni documentos que lo respalden.

En Colombia, cada tres días una mujer es asesinada a manos del compañero o ex compañero sentimental, cada mujer es asesinada con sevicia, por medio de puñaladas, golpeadas, empaladas, desfiguradas y hasta quemadas vivas (El Tiempo, 2018). Los lugares con mayores cifras de feminicidio para el año 2016, fueron los departamentos del Valle, Antioquia, Magdalena y Bogotá, esto se evidencia en el mapa Número 1.

Mapa 1. Feminicidios en Colombia 2016



Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2016. Elaboración propia.

El Valle del Cauca se encuentra como el departamento con mayores cifras de feminicidios en el país, para el año 2016, ya que tiene el 22,2% de los casos a nivel nacional, de esta cifra, la ciudad de Cali representa el 69,77% a nivel departamental, siendo la más alta con respecto a los demás municipios, seguido de Palmira que posee el 11,63% del departamento del Valle, se infiere que el principal agresor en estos casos son los compañeros o ex compañeros sentimentales, así mismo se da cuenta que las mujeres habrían sido víctimas de violencia intrafamiliar antes de su asesinato.

El coronel Henry Jiménez, de la Policía Metropolitana de la ciudad de Cali, afirmó que la mayoría de los casos, las mujeres habrían tenido supuestos maltratos antes de que se realizara su asesinato, de esta manera se afirmó también que, desde mediados del 2015 hasta el 2016, alrededor de 11 mujeres presentaron denuncias por violencia intrafamiliar en la Fiscalía, lo que sería una cifra baja y que da cuenta de un sub-registro por el temor a denunciar (El Tiempo, 2016).

Por otro lado, la ciudad de Bogotá también cuenta con gran incidencia en la ocurrencia de los feminicidios a nivel nacional, la capital colombiana posee el 21,65% de los casos, llevándose esta el segundo lugar con mayor ocurrencia de los hechos. La secretaria general de la mujer afirma que se le está haciendo frente a la situación con una fuerte institucionalidad para que no queden impunes los casos y así facilitar los mecanismos de la denuncia, según el secretario de seguridad, se avanza en una estrategia integral para habilitar una ruta de atención efectiva, es decir, ahondar en temas como la atención psicosocial, las denuncias y asesorías jurídicas (El Tiempo, 2018).

De esta manera, es importante resaltar que si bien, la secretaria de la mujer le hace frente a la problemática por medio de estrategias que buscan mejorar los mecanismos de denuncia, el problema no es solucionado de raíz, dado a que no se hace un plan efectivo para la prevención de los diversos tipos de violencia que se pueden convertir en feminicidios, sino que se hace énfasis en la denuncia de los mismos.

Por su parte el departamento del Magdalena se encuentra también como uno de los tres principales lugares con mayores cifras de feminicidio a nivel nacional, aunque esta no es tan alta como en los dos anteriores casos, se encuentra dentro de las primeras. El Magdalena posee el 9,28% del asesinato a mujeres por el hecho de ser mujer en Colombia, la ciudad de Santa Marta representa el 66,67% de los feminicidios, seguida de Fundación que posee el 16,67% de la cifra a nivel departamental. La red de mujeres en el Magdalena aseveran que se deben alarmar las entidades públicas, dado a que no solo son las cifras de feminicidio sino los actos de agresión contra las mismas, haciendo referencia a los casos de violencia intrafamiliar, que es el inicio del camino para un feminicidio (El Tiempo, 2017).

Funcionalidad de la Política Pública de Equidad de Género en Colombia

La implementación de políticas públicas se considera como una de las etapas más importantes para la solución de problemáticas de carácter social, ya que se van a efectuar los objetivos plasmados para la solución del problema público, según Van Meter y Van Horn la implementación de políticas públicas abarca acciones que buscan el cumplimiento de los objetivos previamente decididos (Meter y Horn, 1975).

Para la valoración de los productos de una intervención resulta necesario ejecutar un proceso de evaluación el cual está presente en todas las fases y su criterio de desarrollo es autónomo de quienes formulan e implementan la política. Así entonces, la evaluación de política pública se entiende como un procedimiento analítico que brinda información sobre el desempeño de la política, sirviendo de base para la planificación de la intervención pública a lo largo del tiempo, al proporcionar una valoración sistemática y objetiva de su diseño, gestión y resultados alcanzados (Dunn, 2008).

Asimismo, se define como el análisis objetivo, sistemático y empírico de los efectos de las políticas y los programas públicos en curso sobre sus objetivos, en términos de las metas

que pretenden alcanzar, así entonces la evaluación se ocupa de dos dimensiones: cómo medir una política contra las metas que pretende alcanzar y cuál es el impacto real de la política en cuestión (Dye, 1987).

La política de la mujer, propone garantizar una vida libre de violencias a través del diseño de acciones sostenibles para la transformación cultural contribuyendo esto al goce efectivo de los derechos de las mujeres. En Colombia, mediante la implementación de esta política se busca mitigar la discriminación y garantizar los derechos fundamentales a las mujeres, de esta manera se construiría una sociedad más justa, equitativa, incluyente y en paz (Presidencia de la República, 2013). La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer realizó los lineamientos de esta política, con el fin de que haya una elaboración de forma participativa en los diferentes sectores sociales que integran las mujeres en Colombia, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos presentes en cada territorio.

Para la evaluación de la política pública, se recurre a la evaluación de productos, consolidándose como el tipo de evaluación que se utiliza para analizar en qué medida se logró cumplir con las metas de productos entregados frente a los insumos invertidos. Así entonces, esta evaluación es una valoración ex-post de corto plazo y se adelanta mediante la entrega de productos y servicios programados, en este tipo de evaluación no es necesario observar los resultados ni el impacto de los productos, ya que estos elementos deben ser abordados mediante evaluaciones de mediano y largo plazo (DNP, 2012).

De este modo, partimos con las entidades vinculadas en el proceso de implementación, en la cual se hace referencia a la afinidad que estas tenían con el proceso, lo cual se establece haciendo mención de las acciones que se desarrollan al interior de estas para su implementación.

Las entidades vinculadas en el proceso de implementación de la política pública corresponden a instituciones del Estado Colombiano, que, en una articulación de la nación y sociedad civil, desarrollan lo estipulado en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, en la que dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. En el cual en el artículo 104, se establecen los deberes de las entidades públicas para la promoción de instancias de participación formal e informal, donde garantiza la participación en temas de planeación del desarrollo, políticas sociales, convivencia ciudadana y reconciliación e inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas (Congreso de la República de Colombia, Ley 1757 de 2015).

Con base a lo anterior, las entidades que se vincularon fueron clasificadas en grupos según la afinidad que tenga, agrupadas por diferentes factores como educativo, económico, enfoque territorial, político y judicial convirtiéndose estas en características y condiciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos y lineamientos que se diseñaron para la implementación. A continuación, los grupos en que se distribuyen las entidades participantes.

Tabla 3. Entidades vinculadas al proceso de implementación de Equidad de género



Fuente: Política Pública, 2013. Elaboración propia.

Entre la subdivisión de las entidades el primer grupo cuenta con: Agencia Colombiana Para la Reintegración, Fiscalía General de la Nación, DANE, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Policía Nacional. Lo que pretende es la ubicación de escenarios que sean propicios que promuevan y faciliten la participación, reconociendo que varias entidades cuentan con una estructura y andamiaje más fuerte que otras lo cual garantiza el cumplimiento de la política, así como es destacado en (Proyectamos Colombia, 2017).

La Agencia Colombiana para la Reintegración que cuenta con un área denominada Planeación Ciudadana, en que se desarrolla procesos de reconciliación, participación política y prevención del reclutamiento por parte de grupos al margen de la Ley y otros espacios con organizaciones como Mujeres Constructoras de Paz o Mujeres Tejedoras en el Valle del Cauca.

Otras entidades, presentan una estructura de participación más débil, como lo es el caso del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que presenta un aporte en relación con las cifras, siempre permitiendo tener datos más certeros con relación al género, pero no un ajuste interpretativo a lo que es este y la posición de las mujeres en la sociedad colombiana ya que lo que se requiere es la propiciación de escenarios de participación efectiva de las mujeres en la configuración de una participación democrática que tenga en cuenta la equidad de género, así mismo el Ministerio de Agricultura no poseen espacios institucionalizados, lo que afecta la participación efectiva de las mujeres (Proyectamos Colombia, 2017).

Dentro de los escenarios que presentaban las condiciones más propicias de la política fueron el Centro Nacional de Memoria Histórica, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones, Ministerio de Cultura, SENA, Ministerio de Trabajo y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. En donde

se destaca “El Centro Nacional de Memoria Histórica que cuenta con espacios con organizaciones de mujeres como la Organización Femenina Popular y organizaciones de mujeres víctimas” (Proyectamos Colombia, 2017). Estas entidades se han establecido con proyectos que fortalecen la identidad de los colombianos, Con proyectos como los de reconstrucción de memoria, siendo un escenario propicio para el desarrollo.

Por último, lugar se encuentra el grupo de entidades: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Minas, Energías, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este es un grupo que se constituye como apoyo, ya que su estructura institucional no ha atendido a este tipo de líneas temáticas, lo cual limita en cierta medida el desarrollo y alcance de la política en otros escenarios.

En este sentido, la política pública de equidad de género proponía en uno de sus ejes la transformación cultural y la construcción de paz, donde se avanzaría en la eliminación de las prácticas que construyen, reproducen y refuerzan la violencia y de esta manera se vulneran los derechos de las mujeres mediante la necesidad de construir una sociedad democrática y en paz. De esta manera, la política pública busca articular y armonizar las acciones para el fortalecimiento institucional, la gestión del conocimiento y estrategias de comunicaciones pedagógicas que sirvan como herramientas de promoción del tema de género en el accionar de una sociedad pacífica, así mismo, la transformación cultural apunta a la construcción de una sociedad respetuosa de las diferencias y al reconocimiento del papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y familiar (Presidencia de la República de Colombia, 2013).

Dentro de la evaluación de productos, lo que se busca es conocer el cumplimiento de los productos entregados frente a los ejes o lineamientos de la política pública, de esta manera se evidencia en la tabla N° 4 las acciones realizadas en el eje de transformación cultural y la construcción de paz, avanzando en 0% en la realización de campañas de género en los ámbitos deportivos y las acciones relacionadas al apoyo en el desarrollo de programas de infancia, adolescencia juventud y adulto mayor, en este orden, la acción perteneciente a la implementación e investigación acerca de la recreación y el deporte teniendo un enfoque de género se ha cumplido en un 50%.

Asimismo, la incorporación del enfoque de género en el Centro Nacional de Memoria histórica se ha hecho en un 58% y finalmente acciones como la incorporación del enfoque de género en el Ministerio de Relaciones exteriores, la visibilización de campañas acerca de la situación de las niñas y jóvenes en redes sociales, la promoción de hábitos de vida saludable para las mujeres y el funcionamiento del observatorio de asuntos de género han cumplido su meta al 100% cada una.

Dentro de la evaluación de productos, lo que se busca es conocer el cumplimiento de los productos entregados frente a los ejes o lineamientos de la política pública, de esta manera se evidencia en la tabla N° 4 las acciones realizadas en el eje de transformación cultural y la construcción de paz, avanzando en 0% en la realización de campañas de género en los ámbitos deportivos y las acciones relacionadas al apoyo en el desarrollo de programas de infancia, adolescencia juventud y adulto mayor, en este orden, la acción perteneciente a la implementación e investigación acerca de la recreación y el deporte teniendo un enfoque de género se ha cumplido en un 50%.

Asimismo, la incorporación del enfoque de género en el Centro Nacional de Memoria histórica se ha hecho en un 58% y finalmente acciones como la incorporación del enfoque de género en el Ministerio de Relaciones exteriores, la visibilización de campañas acerca de la situación de las niñas y jóvenes en redes sociales, la promoción de hábitos de vida saludable para las mujeres y el funcionamiento del observatorio de asuntos de género han cumplido su meta al 100% cada una.

Tabla 4. Avances del lineamiento construcción de paz y transformación cultural

Avance sobre la meta final de cada acción	
Acción	Avance de la acción
Realización de campañas que rompan con el esquema tradicional del género dentro del ámbito deportivo	0%
Apoyar a través de la cofinanciación el desarrollo de programas de infancia, adolescencia, juventud, adulto mayor y deporte social comunitario	0%
Investigación e implementación en el desarrollo y fomento del deporte, la recreación y la actividad física, a través del Sistema Nacional del Deporte	50%
Incorporar el enfoque de género en los desarrollos misionales y funcionales del Centro de Memoria Histórica	58%
Incluir la perspectiva de género en todos los proyectos de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica	92%
Implementar acciones que tengan en cuenta la promoción de la equidad de género para las mujeres en el bienestar social del Ministerio de Relaciones Exteriores	100%
Desarrollar una campaña a nivel nacional para visualizar la situación de las niñas y adolescentes en el país	100%
Desarrollar programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable en las mujeres	100%
Funcionamiento del Observatorio de Asuntos de Género	100%
Generar movilización en redes sociales frente a las violencias cometidas contra niñas y adolescentes	100%

Fuente: SisConpes 2019, elaboración propia.

Por otro lado, para la efectiva implementación de la política pública de equidad de género en Colombia, es necesario conocer el presupuesto público para ponerla en marcha, en este sentido, se encontró que en el Conpes 161 de 2013, definía los costos del plan de acción para los años 2013-2016, donde la financiación estaría a cargo de diversas entidades según los sectores respectivos.

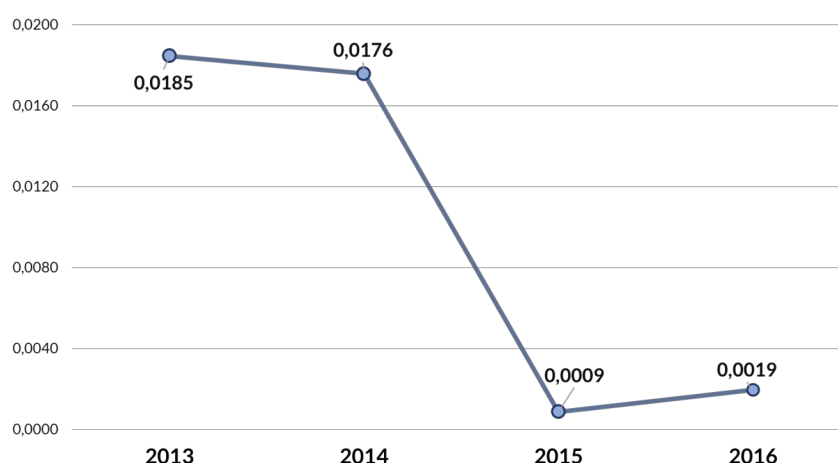
Al evaluar el presupuesto de la política pública equidad de género se evidencia que el presupuesto previsto es bajo con respecto a otros sectores y que la implementación solo se logró en 5 de las 34 entidades, es decir, fue efectuada en: Presidencia de la República, Unidad de Víctimas, el Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo (Proyectamos Colombia, 2017). En este sentido se da cuenta que los rubros de inversión del presupuesto orientado a la política de equidad de género se implementan en un 14,7% de las entidades a nivel nacional durante el período 2013-2016.

Dentro de los rubros de inversión para las mujeres que hace parte de Presidencia de la República se encontraba el fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las entidades nacionales y territoriales, esta inversión se sostuvo durante los años 2013 al

2016, el Ministerio de trabajo implementaba el enfoque de género en el ámbito laboral a nivel nacional, esta inversión también fue durante el período 2013-2016, la Unidad de Víctimas implementó desde el enfoque diferencial y género la Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional, esto se efectuó solo en el año 2016.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo a través del fortalecimiento para la promoción y seguimiento al cumplimiento de los derechos de las mujeres, este rubro se efectuó para los años 2015-2016 y finalmente el ministerio de agricultura a través del apoyo al emprendimiento productivo y desarrollo de las mujeres rurales a nivel nacional durante los años 2013-2014. En este sentido, se da cuenta que la Política Pública de Equidad de Género con respecto al presupuesto brindado es totalmente baja, pues variables como la mala distribución de los recursos y el bajo presupuesto destinado para la política hace que no tenga una implementación efectiva (Ver Gráfica 3).

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto destinado a la política de equidad de género



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2013-2016. Elaboración propia.

Siguiendo lo anterior, resulta importante resaltar que se debe integrar el enfoque de género teniendo en cuenta que los territorios no presentan las mismas condiciones y así mismos, veeduría por parte de las mujeres con el fin de que estas sean tomadas en cuenta en el proceso de planeación y programación, contribuyendo de esta manera al avance de la igualdad de género y el respeto de los derechos de las mujeres, para ello se debe destinar un presupuesto público con el cual se efectúe, sin embargo, este presupuesto puede variar a pesar de las necesidades que se tengan.

Conclusiones

Se logra evidenciar a lo largo del texto que Colombia se configura como un país con altos índices de violencia contra la mujer a pesar del desarrollo normativo que ha tenido a lo largo del tiempo, las bajas propuestas gubernamentales y la poca atención que se le ha brindado a las víctimas, ha ahondado en que los casos de mujeres que sufren violencia intrafamiliar

terminen en feminicidios. No obstante a esta problemática, se evidencia que en conjunto se sufre también de violencia a causa del conflicto armado, configurando a las mujeres como dobles o triples víctimas de los diferentes tipos de violencia, a pesar de ello, en los constantes acuerdos firmados en negociaciones por parte de las fuerzas armadas revolucionarias y el gobierno nacional se evidencia un mínimo del 4% de participación de mujeres, obteniendo de esta manera una desigualdad evidente, teniendo en cuenta que las mayores víctimas en Colombia son las mujeres.

A pesar que el enfoque de género se encuentra como principio de derechos y se cataloga como uno de los lineamientos principales del Acuerdo Final, el cual le apuesta a la inclusión como un principio de actuación social, política y democrática, encaminado al reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en especial de las mujeres independiente de su estado civil, ciclo vital, relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, con el fin de garantizar la paz en todo el territorio colombiano previniendo y reaccionando a todos los actos violentos en contra de las mujeres, esto no se logra obtener a partir de la implementación de la política pública, ni la implementación de los acuerdos, pues se evidencia una constante en términos de violencia.

En relación a la política pública de equidad de género implementada por el gobierno nacional colombiano, resulta pertinente resaltar que las mujeres han estado constantemente en escenarios de violencia, notándose en la evaluación de productos que la política da cuenta de algunas falencias ya que su aplicación no es del 100%, pues en aspectos de presupuesto la política es precaria, lo que incide que muchos de los programas, proyectos, talleres o estrategias no se cumplan a fin de dar a conocer, prevenir y sancionar los actos de violencia contra las mismas, del mismo modo, las entidades e instituciones encargadas en algunos de los lineamientos no los cumplen en su totalidad y las acciones que deben ser ejecutadas para cumplir las metas de los ejes de la Política Pública no se encuentran cumplidas al 100%, pues dinámicas como el bajo presupuesto, la falta de monitoreo y los diversos actores políticos han incidido en el bajo o nulo cubrimiento, protección y prevención hacia a las mujeres colombianas, ahondando en la baja capacidad del Estado en brindar equidad de género con enfoque de paz territorial en Colombia.

Referencias bibliográficas

- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas.
- CEPAL. (2010). XI Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y El Caribe. Brasilia: Secretaria de políticas para as mulheres .
- Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
- Congreso de la República de Colombia. (2015). Ley 1761 de 2015. “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”

- Consejería Presidencial Para La Equidad de la Mujer. (S.f). Política Pública Nacional de Equidad de género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.
- CONPES 161. (2013). Equidad de género para las mujeres. Bogotá.
- Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 42. Título II. 2da Ed. Legis.
- CIDH. (2011). El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en las Americas. Finlandia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- CIDH. (2018). Políticas públicas con enfoque de derechos humanos . Comisión Interamericana de Derechos Humanos .
- Departamento Nacional de Planeación. (2012). Guía para la Evaluación de Políticas Públicas Serie de Guías Metodológicas Sinergia. Bogotá.
- Dunn, W. (2008). Public Policy Analysis. New York: Taylor & Francis.
- Dye, T. (1987). Understanding Public Policy. Pearson Press
- El Tiempo. (25 de 09 de 2016). Investigan a pareja sentimental de mujer asesinada en Cali.
- El Tiempo. (16 de 08 de 2017). Articulan acciones contra la violencia hacia la mujer en el Magdalena.
- El Tiempo. (25 de 06 de 2018). Baja la tasa de feminicidios, pero aumenta la de violencia física.
- El Tiempo. (29 de 05 de 2018). Cada tres días ocurre un feminicidio en Colombia.
- Huertas O., y Jiménez, N. (2016). Feminicidio en Colombia: reconocimiento de fenómeno social a delito. Pensamiento Americano, 9 (16). <https://doi.org/10.21803/pensam.v9i16.71>
- Lagarde, M. (2008). Antropología, feminismo y política: Violencia feminicida y derechos humanos de las mujer.
- Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. Proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en México. Bogotá: Univeridad Nacional de Colombia.
- Meter, V., y Horn, V. (1975). En Vaquero, B. La implementación de políticas públicas. Dikaion, 21 (16), noviembre, 2007, pp. 135-156. Universidad de La Sabana.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2013). Presupuesto General de la Nación. Presidencia de la República de Colombia
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2014). Presupuesto General de la Nación. Presidencia de la República de Colombia
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2015). Presupuesto General de la Nación. Presidencia de la República de Colombia
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2016). Presupuesto General de la Nación. Presidencia de la República de Colombia
- Observatorio para los asuntos de género. (2011). La participación política de las mujeres en Colombia. Bogotá: Alta Consejería Presidencial para la equidad de la mujer.
- Presidencia de la República. (2015). Segunda medición del estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres. Bogotá: Alta Consejería Presidencial para la equidad de la mujer.

- Presidencia de la República. (2012). Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Bogotá: Alta Consejería Presidencial para la equidad de la mujer.
- Proyectamos Colombia. (2017). Evaluación institucional y de resultados con enfoque participativo de la Política de Equidad de género para las mujeres. http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Evaluacion-Equidad_de_Genero-Conpes_161.pdf
- Roth, A. (2014). Políticas Públicas: formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Torres, M. (2004). "Familia" en Sanmartín, J (ed). El laberinto de la violencia. Madrid: Ariel.
- Torres, I. (2010). Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad. Revista de Derecho Electoral (10), p. 1-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3635860>
- Vílchez, A. (2012). La regulación del delito de feminicidio en América Latina y el Caribe. México: Gobierno del Estado de Jalisco. <https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/content/la-regulacion-de-delito-de-femicidiofeminicidio-en-america-latina-y-el-caribe>